



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto **908/2022 y acumulado 909/2022**, promovido por *** ***** *** ** ***** *

***** **

, a

través de su representante y apoderado legal respectivamente, contra actos de la **Cámara de Diputados del Congreso de la Unión** y otras autoridades; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LAS DEMANDAS. Por escritos recibidos el **seis y ocho de septiembre de dos mil veintidós**, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y de los Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, todos con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, turnados a este juzgado federal *** ***** ** *****

* * * * *

***** ***** ** ***** *****

solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:

Autoridades Responsables



bierno c

sión Na

reclamad

de Energía
de C
gía para
as licua
nal”, pub
ntiocho c
s conside
mo, Vig
mo Oc
y Trigé
nero, Se

o del m
s numer



Lo anterior es así, ya que el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética establece que cuando se reclame en el juicio de amparo una resolución emitida por alguno de aquéllos, tal como la CRE, solo podrá impugnarse la definitiva, ya sea por i) violaciones cometidas en la resolución o ii) durante el procedimiento.

En el caso, es evidente que dicho acto pretende impugnarse como una violación derivada de un acto intraprocesal propio del Procedimiento de Análisis de Impacto Regulatorio a que se sometió el Acuerdo

árrafo ante

mplica dejar
a respecto
á a cabo c
aberse v
2023/2022,
nte el

esto de d
llamados;
ados en s
4, 16, 25,
nales; y,
timaron pe

Y ACUMULA
bre de do
a deman

con el

inició a través de
su informe
o Público de
almente



En diverso proveído de **nueve de septiembre de dos mil veintidós**, se radicó la demanda de amparo promovido por ***** *** ** ***** **

***** y se ordenó acumular al juicio de amparo
908/2022.

CUARTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. El dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional.

QUINTO. CAMBIO DE TITULAR. Por auto de **ocho de agosto de dos mil veintitrés**, se hizo del conocimiento de las partes, la adscripción de la suscrita juzgadora a este juzgado federal a partir del uno de agosto pasado, sin que hicieran alguna manifestación al respecto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 28, párrafo vigésimo, fracción VII, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, y 35 de la Ley de Amparo; 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder



El Consejo
eria del j
cuyo con
este órg
en pa
ogía para
uado de

DE ACTOS

gano de

Energía

Mejor

si lo rec

ificado.

ido que

a acepta

de Ana

procedim

orme al

uencia e

gano de
Energía
Mejor
si lo rec
ificado.

ido que
a acepta
de Ana
procedim
orme al
uencia e

comunicación
da la República
do y Tercero
ormación como
Administrativ
comunicación
n toda la Rep
a las reglas
rganos jurisdic
corresponden
l Diario Oficial



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

la parte quejosa en cuanto a la omisión de sustanciar de forma idónea el procedimiento administrativo establecido para su emisión.

Sin embargo, conforme lo asentado en el resultando primero y atendiendo al hecho de que las quejas pretenden evidenciar que el dictado del Acuerdo **A/023/2022** derivó de un procedimiento que no fue sustanciado de manera idónea, lo procedente es tener como **ciertos** los actos reclamados, constituyendo una cuestión atinente al fondo del asunto, determinar lo fundado o infundado de ese señalamiento.

Además, la existencia del Acuerdo y su anexo está acreditada, ya que, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio su publicación en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de julio de dos mil veintidós²; así como, la publicación de los listados de precios máximos que refieren las quejas, al ser posible su consulta vía internet en la página oficial de la comisión³.

TERCERO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA FUNDADA.

Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe abordarse el estudio de las causales de improcedencia previstas en

² DOF - Diario Oficial de la Federación

³ [Precios mximos aplicables de Gas LP | Comisin Reguladora de Energa | Gobierno | gob.mx \(www.gob.mx\)](http://Precios%20m%C3%A1ximos%20aplicables%20de%20Gas%20LP%20Comisi%C3%B3n%20Reguladora%20de%20Energ%C3%ADa%20Gobierno%20gob.mx%20www.gob.mx)



...aro, ya s
e su estu
den púb
n lo prev
o.

a Juzg
ocedenc
\$1, fracc
sentido c
o que l
ción con
a las ver
róleo que
con fun
su inmine

artícul

e amparo

ás cas
alguna d
Estados U

...aro, ya s
e su estu
den púb
n lo prev
o.

a Juzg
ocedenc
\$1, fracc
sentido c
o que l
ción con
a las ver
róleo que
con fun
su inmine

artícul

e amparo

ás cas
alguna d
Estados U

...aro, ya s
e su estu
den púb
n lo prev
o.

a Juzg
ocedenc
\$1, fracc
sentido c
o que l
ción con
a las ver
róleo que
con fun
su inmine

artícul

e amparo

ás cas
alguna d
Estados U

...aro, ya s
e su estu
den púb
n lo prev
o.

a Juzg
ocedenc
\$1, fracc
sentido c
o que l
ción con
a las ver
róleo que
con fun
su inmine

artícul

e amparo

ás cas
alguna d
Estados U

...aro, ya s
e su estu
den púb
n lo prev
o.

a Juzg
ocedenc
\$1, fracc
sentido c
o que l
ción con
a las ver
róleo que
con fun
su inmine

artícul

e amparo

ás cas
alguna d
Estados U

...aro, ya s
e su estu
den púb
n lo prev
o.

a Juzg
ocedenc
\$1, fracc
sentido c
o que l
ción con
a las ver
róleo que
con fun
su inmine

artícul

e amparo

ás cas
alguna d
Estados U

...aro, ya s
e su estu
den púb
n lo prev
o.

a Juzg
ocedenc
\$1, fracc
sentido c
o que l
ción con
a las ven
róleo que
con fun
su inmine

artícul
e amparo

ás cas
alguna d
Estados U

...aro, ya s
e su estu
den púb
n lo prev
o.

a Juzg
ocedenc
\$1, fracc
sentido c
o que l
ción con
a las ver
róleo que
con fun
su inmine

artícul

e amparo

ás cas
alguna d
Estados U



VIII. Los conceptos de violación.

$$(\dots).$$

De la interpretación sistemática de dichos preceptos se puede desprender que en el caso de que se omita formular conceptos de violación en contra de los actos reclamados, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio, puesto que la consecuencia de no hacerlo se traduce en la imposibilidad del juzgador de efectuar un análisis de la constitucionalidad del acto reclamado.

Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 28/93 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: **CONCEPTOS DE VIOLACION EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO**⁴.

Si bien el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 68/2000⁵, ha establecido que no es un requisito esencial e imprescindible que los conceptos de violación se presenten como un verdadero silogismo, sí es necesario

⁴ Visible en la página web del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro electrónico 206656.

5 **“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.”** Visible en <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191384>.



avio, par

s quejos
dos refe
se obse

su conte
incluya
ecto del

ceptos

to de tale
entenders
correspo



resolución que se reclame resulta inconstitucional o ilegal.⁶

En el caso, aun cuando las quejas señalan los preceptos que impugnan, los artículos constitucionales y derechos fundamentales que consideran fueron violados, no precisan las razones por las cuales consideran que los listados reclamados vulneran el contenido de esos preceptos constitucionales mediante argumentos específicos.

En ese sentido, al no haber expuesto algún razonamiento con el que demostraran que los listados bajo análisis son inconstitucionales, es claro que la causa de pedir requerida para estar en posibilidad de examinar su constitucionalidad no quedó satisfecha. Máxime que por la materia de este juicio, no existe obligación de suplir la deficiencia de la queja conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo.

Por tanto, ante la ausencia de argumentos que acusen la violación de derechos fundamentales que ocasionan actos en comento, lo procedente es **sobreseer** en el juicio de amparo respecto de tales actos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61,

⁶ Cfr., tesis (V Región)2o. J/1 (10a.), de rubro: **“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR ‘RAZONAMIENTO’ COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO.”**, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo III, página 1683.

63, fracc



IMPROVE

os actos
omisión
causal c
acción X
l Acuerdo
al a la pa

to A/023/
ales, co
la viabili
de gas lic
el desenv
ni limita
ejosas c
:

la metod
argen de
arte quej
económic



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En relación con ello, la **CRE** también manifiesta que el perjuicio planteado en todo caso es de tipo económico, no jurídico y, por ello, no es suficiente para justificar la procedencia del juicio de amparo.

La causa de improcedencia propuesta es **inoperante.**

El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo que invoca la autoridad responsable, prevé lo siguiente:

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

$$(\dots)$$

XII. *Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...).*

El interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional y, así el peticionario de garantías debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo

a, o sea
en sus
stancia
icio de

Jurisprudencia
 de los
 Tribunales
 de Justicia
 Tomo V
 Judicial

EN QUI
artículo
el derec
n la vía
dividuale





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

inferirse en base a presunciones, según lo establece la jurisprudencia número 321, que puede localizarse en la página doscientos dieciséis, de la compilación invocada, que dispone:

INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.

Cabe agregar que, el interés jurídico a que se alude tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.

Resulta atendible, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 141/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, diciembre del dos mil dos, página doscientos cuarenta y uno, que dice:

INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de

[illegible]

destacar
la titula
a afectac
o, emple
orden
esto es,
cepcional
general
frente a



legítimo cuya materialización exige que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le reconozca un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente.

De esta manera, conviene reiterar que en la especie se reclama el **“Acuerdo Núm. A/023/2022 por el que la Comisión Reguladora de Energía emite las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen la metodología para la determinación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final”**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de julio de dos mil veintidós, su **Anexo Único** del referido Acuerdo A/023/2022 y la consecuente lista de precios máximos aplicables de Gas LP a consumidores finales y medio de venta que se publican semanalmente.

El Acuerdo en cuestión establece una metodología que cambia el paradigma del mercado, en cuatro apartados:

1. Explica cuál será el alcance y objetivos de la regulación;
2. Desarrolla el concepto de planta tipo;



do de pe

ones rela
metodol

tercer año
s precios
región- s
ostos qu

a planta t

los costos
tipo;

arámetro
e venta

estimado por el análisis de la información



v. El margen de comercialización, el cual considera una TIR (tasa interna de retorno) que permita a los permisionarios la recuperación de los costos totales por la inversión y operación del permiso de distribución de gas LP mediante planta, en un plazo máximo de veinte años y un margen de utilidad por la realización de la actividad.

De lo anterior, se llega a la convicción de que el ente regulador estableció una fórmula general para calcular el precio máximo de gas natural para cada región, integrada por una serie de variables. En ese contexto, queda demostrado que con el acuerdo reclamado se modificó el mercado de gas licuado de petróleo, dado que se transitó de un esquema libre de mercado a un sector regulado, en el que se imponen precios máximos para la comercialización del hidrocarburo.

De ahí que, a criterio de quien resuelve, los actos reclamados sí tienen consecuencias y efectos susceptibles de afectar o trascender en la esfera jurídica de las inconformes, puesto que como destinatarias de la norma (permisionarias), les son impuestas obligaciones y cargas regulatorias que, a su parecer, inciden directamente en el derecho fundamental de competencia y libre concurrencia en el mercado de distribución y expendio al público de Gas Licuado de Petróleo.



Situación jurídica ante los actos reclamados que se corrobora con los siguientes medios de prueba:

1. *****
***** : Título de permiso
de distribución de gas licuado de petróleo mediante
planta de distribución número *****.

2. ***** ** ** ***** ** *****
***** ***** ** ***** *****: Título
de permiso de expendio al público de gas licuado de
petróleo mediante estación de servicio con fin específico
número *****.

No pasa inadvertido que las documentales descritas constan únicamente de las caratulas de los aludidos permisos; sin embargo, de la consulta realizada en la página oficial de la responsable se obtiene que se encuentran operando y a nombre de las ahora quejosas.

Además, de las actas constitutivas que las sociedades exhibieron, se desprende como objeto social en común, la ***** ; por lo que, es preciso insistir, si los actos reclamados se controvierten por el cúmulo de derechos y obligaciones incorporados a la esfera



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

jurídica de las quejas permisionarias, tal como el derecho de seguridad jurídica y los principios de libre competencia y concurrencia, entre otros, entonces debe considerarse acreditado su interés jurídico para instar el presente juicio.

Los referidos medios de prueba merecen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, puesto que fueron exhibidos de manera electrónica, manifestando las quejas, bajo protesta de decir verdad, que su digitalización es una reproducción fiel de sus originales físicos impresos.

Máxime, que de conformidad con el artículo 88 de la referida codificación, se tiene como hecho notorio la consulta efectuada a la página digital oficial de la autoridad responsable, de la que se puede apreciar el registro de los citados permisos.

Por consiguiente, contrario a lo que arguye la Comisión Reguladora de Energía, no es factible considerar que su reclamo únicamente se relaciona con una afectación de tipo económico, menos aun cuando las inconformes acreditan que son titulares de un permiso vigente de distribución y expendio de gas LP a través de planta de distribución; por lo que, se ubican dentro de los sujetos obligados a dar cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo reclamado.



er, los
so, invol
el asunto
finalidad
imiento a

sión Nacional de la Defensa Civil invoca el artículo 6º del Decreto-Ley No. 17.098, es 5, fra-
cso 1º, inciso I, párrafo 1º, línea 1ª y 2ª, en su com-
pleto, para declarar que el artículo 23 del manda-

a sus co
endiendo
miento y
ciones, c
regulatorias



Agrega, que en ejercicio de esa atribución, lleva a cabo el llamado procedimiento de mejora regulatoria, de conformidad con los artículos 71 a 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria, el cual se aplica a los sujetos obligados de la Administración Pública Federal, con determinadas salvedades. Que bajo esos supuestos normativos, previo a la emisión de una regulación, dichos sujetos obligados deben enviar a la CONAMER su propuesta regulatoria, acompañada de su correspondiente AIR (Análisis de Impacto Regulatorio), a efecto de sujetarlos al procedimiento, salvo las excepciones que en el artículo 71 dispone.

Por lo que, a su parecer, la CONAMER no participa en la elaboración de las propuestas regulatorias que se someten a su consideración ni en los AIR que los acompañan; sino que, únicamente recibe esas propuestas regulatorias, las cuales, no tienen efecto hasta en tanto se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, de ahí que su intervención en el procedimiento no reúne los elementos necesarios para ser considerados actos de autoridad para efectos del juicio de amparo.

En relación con lo anterior, la **CONAMER** invoca la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, señalando que la parte quejosa no tiene interés jurídico para reclamar los



actos dentro del procedimiento de mejora regulatoria; puesto que, por su naturaleza, que conlleva el análisis y opiniones técnicas que emiten los sectores interesados, no causa algún daño a las inconformes, dado que el pronunciamiento o determinación final se desahoga exclusivamente con el órgano regulador, esto es, entre la **CONAMER** y la **CRE**.

Tales causas de improcedencia son **inoperantes**.

Pues, conforme se ha mencionado en este fallo, el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética establece que cuando se reclame en el juicio de amparo una resolución emitida por alguno de aquéllos, tal como la CRE, sólo podrá impugnarse la definitiva, ya sea por i) violaciones cometidas en la resolución o ii) durante el procedimiento.

Y, en el caso, es evidente que la violación intraprocesal que se reprocha a la **CONAMER**, como autoridad que tiene legal intervención en el Procedimiento de Análisis de Impacto Regulatorio a que se sometió el Acuerdo **A/023/2022** de la CRE, sostiene el dictado de este último; por lo que, corresponde al estudio de fondo el determinar si dicho Acuerdo, por sí o derivado de una violación en el procedimiento, afecta o no la esfera de derechos de las quejas (permisionarias).



Al no existir diversa causa de improcedencia que hagan valer las partes o cuya actualización se advierta de oficio, lo procedente es analizar el fondo del asunto a la luz de los conceptos de violación que expone la parte quejosa, al imperar en la especie el principio de estricto derecho.

QUINTO. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a efectuar el estudio de fondo del asunto, se considera pertinente relacionar los antecedentes inmediatos del **Acuerdo A/023/2022** y la

aber:

ro de dos
Oficial de
investigaci
expedient
e práctica
de la
el territori

a segunda
de marzo
el cual se
uncia ide

, po
opólicas
mercializa
y expend
nal bien



5. En cumplimiento a esa directriz, el veintinueve de julio de dos mil veintiuno, la CRE emitió el acuerdo A/024/2021 que establece la regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, en cumplimiento a la Directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, emitida por la Secretaría de Energía, con la finalidad de proteger los intereses de los usuarios finales.

6. Tanto la directriz⁷ como el acuerdo⁸ mencionados fueron prorrogados por seis meses más.

⁷ A través del Aviso por el que se prorroga la vigencia de la Directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo.

mayo de
rio Oficial
por el qu
Federal
ación de
iciones
vinculada
nacional, i

e de dos
prelimin
de man
eterminar
efectiva e
inte) me
no vincu
tribución

comisión
stituible por
combust
ral, del
stos de i

⁸ A través del acuerdo A/001/2022, por el que se amplía la vigencia del Acuerdo A/024/2021, que establece la regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al Usuario Final, en cumplimiento al Aviso por el que se prorroga la vigencia de la Directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Asimismo, indicó que ni el expendio al público ni la comercialización de gas LP son alternativas viables a la distribución mediante plantas de distribución o autotanque, por los siguientes motivos:

Actividad	Motivo
Expendio al público de gas LP	<p>Se realiza en las modalidades de BODEGA DE EXPENDIO, ESTACIÓN DE SERVICIO CON FIN ESPECÍFICO y Estación de Servicio para Autoconsumo.</p> <p>La modalidad de BODEGA DE EXPENDIO es una actividad que se realiza in situ, por lo que los USUARIOS FINALES tendrían que desplazarse hasta los puntos de venta para adquirir el GLP. En el caso de las ESTACIONES CON FIN ESPECÍFICO, la regulación permite el llenado parcial de los RECIPIENTES PORTÁTILES. Sin embargo, el llenado se limita a un peso bruto de 25 (veinticinco) kilogramos y, además, se requiere que el USUARIO FINAL sea quien se traslade. Finalmente, la modalidad de Estación de Servicio para Autoconsumo únicamente permite que el GLP sea consumido por el propio permisionario, es decir, no permite la venta de GLP a USUARIOS FINALES.</p> <p>Desde el lado de la demanda, estos elementos impiden que el EXPENDIO AL PÚBLICO constituya una alternativa de sustitución a la DISTRIBUCIÓN de GLP mediante PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN y AUTOTANQUES para los USUARIOS FINALES.</p> <p>Desde el lado de la oferta, las actividades de un permisionario de EXPENDIO AL PÚBLICO se encuentran limitadas por su permiso. Así, para estar en posibilidad de distribuir GLP a los USUARIOS FINALES, los permisionarios de EXPENDIO AL PÚBLICO tendrían que adquirir el permiso correspondiente (24) cumplir con la normatividad y regulación asociadas e invertir en la adquisición de los equipos necesarios para llevar a cabo la DISTRIBUCIÓN.</p>
Comercialización de gas LP	<p>No constituye una alternativa viable a la DISTRIBUCIÓN de GLP mediante PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN y AUTOTANQUES.</p> <p>Un COMERCIALIZADOR no suele contar con infraestructura propia, por lo que se encuentra restringido a la existencia o disponibilidad de otros permisionarios para poder entregar el GLP en los domicilios de los USUARIOS FINALES o, por el mismo, solicitar los permisos correspondientes. Sin embargo, la obtención de estos permisos,</p>

lio de d
amado A
ra de E
as de C
gía para
as licua
nal.

de di
encionad
el cálculo

que dicho
costos d
LP a pa
ulo de
se contie

$$+ Fl_{Q-1,i,mu}$$

$$+ Fl_{Q-1,i,mu}$$

100

- región i , en la sem
kilogramo, o pesos p
cialización por punto
ado del flete desde
ducción aplicable a la
ción estimado para
como método de c
existir variaciones de
cable a cada munic



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

10. El veintidós de septiembre de dos mil veintidós, la COFECE emitió resolución en el expediente ***** , en la que resolvió lo siguiente:

PRIMERO. Se determina la ausencia de condiciones de competencia efectiva en doscientos trece mercados relevantes, consistentes en la distribución de GLP a usuarios finales mediante plantas de distribución y autotankue con una dimensión geográfica regional, identificados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220.

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. En su sexto concepto de violación las quejas alegan que los actos reclamados son contrarios a los derechos de seguridad jurídica y buena administración, ya que derivan de un procedimiento de mejora regulatoria que se llevó a cabo de manera irregular, en virtud de que no se estudió ni analizó a fondo el verdadero impacto y sustento de la



de requ
ntación
do y anex

infunda

or, es nec
e que n
ue hace

Mejora R
establece l

Mejora R
establece l
los S
orias, las
ria corre
regulatorio
termine, a
e esta Le
echa en
Difusión d
Ejecutiv
cipal,

transc
propues

⁹ Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:



deberán presentarla ante la autoridad de mejora regulatoria correspondiente, en términos del artículo 69 de la misma ley, que a la letra dice:

Artículo 69. Los Análisis de Impacto Regulatorio establecerán un marco de análisis estructurado para asistir a los Sujetos Obligados en el estudio de los efectos de las Regulaciones y Propuestas Regulatorias, y en la realización de los ejercicios de consulta pública correspondientes, los cuales deberán contener cuando menos los siguientes elementos:

1. La explicación de la problemática que da origen a la necesidad de la intervención gubernamental y los objetivos que ésta persigue;

II. El análisis de las alternativas regulatorias y no regulatorias que son consideradas para solucionar la problemática, incluyendo la explicación de por qué la Regulación o Propuesta Regulatoria es preferible al resto de las alternativas;

III. La evaluación de los costos y beneficios de la Regulación o Propuesta Regulatoria, así como de otros impactos incluyendo, cuando sea posible, aquéllos que resulten aplicables para cada grupo afectado;

IV. El análisis de los mecanismos y capacidades de implementación, verificación e inspección;

V. La identificación y descripción de los mecanismos, metodologías e indicadores que serán utilizados para evaluar el logro de los objetivos de la Regulación, y

(...)

XIX. Sujeto Obligado: *La Administración Pública Federal y sus respectivos homólogos de las entidades federativas, los municipios o alcaldías y sus dependencias y entidades, la Fiscalía General de la República y las procuradurías o fiscalías locales.*

Los poderes legislativos, judiciales, así como los organismos con autonomía constitucional de los órdenes federal o local y los organismos con jurisdicción contenciosa, que no formen parte de los poderes judiciales serán sujetos obligados para efectos de lo previsto en el Capítulo VI del Título Segundo de esta Ley.



los esfuerzos
cabo p
regulatoria
que haya
regulatoria a

isto en el
regulatoria
cuerdo a
Asimismo
in estable
observa
quen el in

la oficial de
como he
del Cód
orio de la
mitió a di
uesta de
conform
a, análisis
ón de im

de esa d
CONAME
el
sobre
(cofemersim

u (cofemersim

[emitido/61140](#)



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

regulatoria, precisó sus objetivos y la problemática a la cual se dirige, analizó otras alternativas posibles, especificó el impacto de la regulación conforme a un análisis costo-beneficio, entre otras cuestiones. En la parte final del oficio señalado, dice lo siguiente:

Con base en lo anterior, se emite el presente Dictamen Final, por lo que la CRE podrá continuar con las formalidades necesarias para la publicación de la Propuesta Regulatoria en el DOF, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76, primer párrafo de la LGMR.

Cabe señalar, que esta Comisión se pronuncia sobre el formulario del AIR y la Propuesta Regulatoria, en los términos en que fueron presentados, sin prejuzgar sobre cuestiones de legalidad, competencia y demás aspectos distintos a los referidos en el artículo 8 de la LGMR.

Por ende, a consideración de quien resuelve, no asiste razón a las inconformes en el sentido de que previamente a la emisión del acuerdo reclamado y su anexo no se llevó a cabo un análisis de impacto regulatorio en términos de la legislación que regula dicho procedimiento.

De igual forma, del mismo oficio se advierte que desde el veintitrés de junio de dos mil veintidós, la **CONAMER** recibió una versión previa de la propuesta regulatoria y la hizo pública. Incluso, en la misma página de dicha comisión se advierte que la fecha de apertura del expediente y de publicación en el portal es de esa

robora
se emp
particular

uso, se
nto con
pacto r
treinta c
on el a
iocho de
e la Fede

arse qu
en el artí
ria, pues
al de la c
ismo, est
articulares
einte día
l mencio
requiere

de Energía en
establecen la
lado de petró

ra Regulator
Regulatori
emitan, las m
en el presen
ados que se

plazos mínimos de treinta días, o



Por otra parte, si bien el artículo 69, último párrafo, de la Ley General de Mejora Regulatoria establece la facultad de requerir información diferenciada de acuerdo a la naturaleza y el impacto de las Regulaciones, lo cierto es que la interpretación literal de esa disposición permite advertir que se trata de una atribución potestativa y no como lo hace ver la parte quejosa, una obligación cuyo incumplimiento conlleve una irregularidad en el análisis de impacto regulatorio.

En esa medida, si bien las quejas también señalan que la CONAMER se alejó de los principios y objetivos de la política de mejora regulatoria, incumplió con su deber de responsabilidad y rendición de cuentas, así como que no estudió a fondo la regulación que fue sometida a su consideración, lo cierto es que se tratan de manifestaciones subjetivas que **no desvirtúan el cumplimiento de los requisitos legales conforme al análisis de impacto regulatorio y el procedimiento que se siguió ante esa comisión de manera previa a la emisión de los actos reclamados.**

establezcan en el ámbito de su competencia. La determinación de dichos plazos mínimos deberá tomar en consideración el impacto potencial de las Propuestas Regulatorias, su naturaleza jurídica y ámbito de aplicación, entre otros elementos que se consideren pertinentes y que deberán establecerse mediante el Manual de Funcionamiento del Análisis de Impacto Regulatorio.

Los Sujetos Obligados podrán solicitar a la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente la aplicación de plazos mínimos de consulta pública menores a los previstos en esta Ley, conforme a los lineamientos que para tal efecto emitan.

violaci
rocede a
do. Para
que sirv

ional est
autorid
ción o a
los de co
el alza e
ue const
e una o
del públic

las leyes
s bases
a los art
ren nec
mo popu
anización
ar que
voquen l
precios.

el artículo
ómica es



servicios necesarios para la economía nacional. Para ello, señala, corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar qué bienes y servicios se deben sujetar a esa medida, pero sujeto a la condición de que no haya condiciones de competencia efectiva mediante declaratoria de la COFECE. En este supuesto, sería la Secretaría de Economía la que fijaría los precios correspondientes a fin de evitar la insuficiencia en el abasto¹⁴.

Por otra parte, el artículo 81 de la Ley de Hidrocarburos establece diversas facultades que corresponden a la CRE, una de ellas es la regulación y supervisión de la actividad de gas LP; aunado a ello, el artículo 82 del mismo ordenamiento dispone que la CRE expedirá disposiciones de aplicación general para la regulación de las actividades a que se refiere dicha ley, en el ámbito de su competencia, incluyendo los precios aplicables¹⁵.

¹⁴ **Artículo 9.** Para la imposición, en los términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de precios máximos a los bienes y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente:

I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios máximos, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La Comisión determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.

II. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias o entidades y previa opinión de la Comisión, fijará los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto. (...)

¹⁵ **Artículo 82.** La Comisión Reguladora de Energía expedirá disposiciones de aplicación general para la regulación de las actividades a que se refiere esta Ley, en el ámbito de su competencia, incluyendo los términos y condiciones a los que deberán sujetarse la prestación de los servicios; al igual que la determinación de las contraprestaciones, precios y tarifas aplicables, entre otros.

La regulación de contraprestaciones, precios y tarifas que establezca la Comisión Reguladora de Energía, con excepción de las actividades de Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, gasolinas y diésel, cuyos precios se determinarán conforme a las condiciones de mercado, se sujetará a lo siguiente:

l. La regulación para cada actividad en particular será aplicable salvo que, a juicio de la Comisión Federal de Competencia Económica, existan condiciones de competencia efectiva en dicha actividad, en cuyo caso las contraprestaciones,

aplicable
condiciones
precios
del mercado
n que f
ortunidad
ientes
ctos, libre
y b) en
ables e
n consid
ducir el
ción de
de oport
de fina
co, entre
ñala que
os perm

aplicable
condiciones
precios
del mercado
n que f
ortunidad
ientes
ctos, libre
y b) en
ables e
n consid
ducir el
ción de
de oport
de fina
co, entre
ñala que
os perm

La Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía o los Permisarios podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica que evalúe la existencia de condiciones de competencia efectiva y, en su caso, que emita la declaratoria correspondiente.



solicitar a la COFECE la evaluación de condiciones de competencia efectiva y, en su caso, que emita la declaratoria correspondiente¹⁶.

¹⁶ En relación con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Hidrocarburos, el artículo 77 del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de dicha ley establece:

Artículo 77. La Comisión expedirá, mediante disposiciones administrativas de carácter general, la regulación de las contraprestaciones, precios o tarifas para las actividades permisionadas conforme al presente Reglamento, con excepción de las actividades de comercialización y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, gasolinas y diésel, cuyos precios se determinarán conforme a las condiciones de mercado.

La Distribución no vinculada a Ductos de Gas Licuado de Petróleo y demás Petrolíferos no estará sujeta a la regulación de contraprestaciones, precios o tarifas que emita la Comisión, por tratarse de una actividad que conlleva el Expendio al Público, en términos de los artículos 4, fracción XI, y 82, segundo párrafo, de la Ley, salvo determinación en contrario de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Para cada actividad, la Comisión establecerá la regulación de contraprestaciones, precios o tarifas, la cual además de prever las fracciones I y II del artículo 82 de la Ley, tomará en cuenta los principios que permitan el desarrollo eficiente de la industria objeto del presente Reglamento y de mercados competitivos, que reflejen las mejores prácticas en las decisiones de inversión y operación y que protejan los intereses de los usuarios.

La Comisión no reconocerá las contraprestaciones, precios o tarifas que se aparten de lo establecido en este párrafo. Adicionalmente, las contraprestaciones, precios o tarifas que autorice la Comisión deberán constituir mecanismos que promuevan una demanda y uso racional de los bienes y servicios. La Comisión podrá aplicar las medidas a que se refiere el artículo 83 de la Ley, a fin de que el grado de intervención corresponda con el poder monopólico en cada segmento de la industria permitida pudiendo, de ser el caso, aplicarse contraprestaciones, precios y tarifas basadas en condiciones de mercado, de acuerdo con las mejores prácticas regulatorias si ello contribuye con el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el párrafo anterior.

En la determinación de contraprestaciones, precios o tarifas, la Comisión empleará las herramientas de evaluación que estime necesarias para lograr sus objetivos regulatorios, para lo cual podrá realizar ejercicios comparativos y aplicar los ajustes que estime oportunos, así como emplear indicadores de desempeño para fines de publicidad.

La determinación de contraprestaciones, precios o tarifas que apruebe la Comisión deberá permitir que los Usuarios y los Usuarios Finales tengan acceso a los bienes y servicios en condiciones de confiabilidad, seguridad y calidad, y no deberá ser resultado de prácticas monopólicas. Asimismo, la determinación de contraprestaciones deberá permitir a los Permisarios cubrir sus costos eficientes y una rentabilidad razonable en términos del inciso b) de la fracción II del segundo párrafo del artículo 82 de la Ley.

La Comisión podrá requerir, en los términos y formatos que al efecto determine, la información de costos, condiciones de operación y demás elementos estadísticos, técnicos y financieros que permitan valorar el riesgo de las actividades y el desempeño y la calidad de la prestación del servicio, para efectos de la estructura tarifaria y sus ajustes.



Otra actividad que en principio se encuentra excluida de la regulación de precios consiste en la distribución no vinculada a ductos de gas LP, por involucrar el expendio al público; sin embargo, se establece como salvedad que exista determinación en contrario por parte de la COFECE en el sentido de que no existen condiciones de competencia efectiva en aquélla.

42



MA. ESTHER PRADO OLVERA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f8.35
13/01/24 17:51:20

e la Uni
los
y supu
lo que,
ea la CF
l ámbito
ción.

onalmente
ulos 9º de
y 82 de
de precio
er orden
en favo
cual pue
ECE em
inexisten
so en q
os precio
ecesarios
pular.

supuesto
determin

Último, c
tos citado

Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis 2a. LXXVI/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, tomo I, página 1245, identificada con el rubro: ***“HIDROCARBUROS. LOS ARTÍCULOS 81, FRACCIÓN VI, 82 Y DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, SE REFIEREN AL ESCENARIO ORDINARIO EN EL CUAL LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ES COMPETENTE PARA DETERMINAR LOS PRECIOS MÁXIMOS DE VENTAS DE PRIMERA MANO DE LOS HIDROCARBUROS, PETROLÍFEROS O PETROQUÍMICOS, ASÍ COMO PARA ESTABLECER LA METODOLOGÍA CORRESPONDIENTE, POR LO QUE GENERAN SEGURIDAD JURÍDICA”.***

Conforme a lo expuesto, se advierte que la Constitución Federal establece la posibilidad de fijar precios máximos en ciertos supuestos; sin embargo,

MA. ESTHER PRADO OLVERA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f8.35
13/01/24 17:51:20

ordinaria.

especto,
estable
cual pre
que no e
clusivam
terminará
recios m

último, de las a dicha ley de pre de come e sujetar En el ca ductos, salvo e que no

vez exp
análisis
en las c

Mismos que, asumen, se emitieron aun cuando no existe un dictamen final de la COFECE respecto a la existencia o inexistencia de condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de venta de Gas LP al usuario final, previa finalización del procedimiento de investigación y determinación relativo; por lo que, están sustentados en meras cuestiones de facto, como lo es el extracto preliminar del dictamen de la COFECE, como un mero proyecto sin ningún efecto jurídico ni de carácter vinculante.

Tal concepto de violación es **infundado**.

En cuanto al principio y derecho de seguridad jurídica, tiene un aspecto positivo y uno negativo. El primero consiste en que los gobernados tengan plena certeza del contenido del ordenamiento jurídico existente, a grado tal que puedan conocer los alcances y consecuencias de las hipótesis normativas que el legislador ha contemplado, así como también el ámbito de competencia y de actuación de las instituciones y autoridades del poder público, las cuales sólo deben actuar de acuerdo con las atribuciones que expresamente tienen conferidas en ley.

¹⁷ Cfr. **P./J. 50/2007**, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 960.

Al respecto, el artículo 96 de la Ley Federal de Competencia Económica establece un procedimiento declarativo, que puede iniciar de oficio o a petición de parte, para que la COFECE analice y determine si existen o no condiciones de competencia efectiva en un mercado, a fin de que la autoridad que corresponda implemente la regulación que resulte necesaria restaurar la operación eficiente en ese sector de la economía.

¹⁸ De la Segunda Sala del máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, octubre de 2006, página 351.

El procedimiento que se establezca para la emisión de la licencia de funcionamiento de los establecimientos de venta de alimentos, deberá ser de carácter preventivo y, en todo caso, no podrá ser superior a los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. El procedimiento de emisión de la licencia de funcionamiento de los establecimientos de venta de alimentos, deberá ser de carácter preventivo y, en todo caso, no podrá ser superior a los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. El procedimiento de emisión de la licencia de funcionamiento de los establecimientos de venta de alimentos, deberá ser de carácter preventivo y, en todo caso, no podrá ser superior a los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.

terior, p
ordinado
ablecer
entes, pa
ria de la
l caso e
cedimien
ncluida la

El caso es
procedimien
ncluida la
Federac
ue no e
los merc
iante pla

se ordena
82 de la

En cuanto al artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos, es posible advertir que establece que la CRE, entre otras autoridades, podrá solicitar a la COFECE que evalúe la existencia de competencia efectiva y, en su caso, que emita la declaratoria correspondiente; sin embargo, además de que se advierte que por el uso del verbo podrá se trata de una facultad potestativa, de dicho precepto no se desprende obligación o mandato alguno para que la CRE solo pueda ejercer su atribución de determinar precios máximos hasta en tanto exista resolución por parte de la COFECE en la que concluya sobre la inexistencia de tales condiciones.

Además, el propio procedimiento previsto en el artículo 96, fracción V, de la Ley Federal de Competencia Económica, permite advertir que la publicación de un dictamen preliminar por parte de la

MA. ESTHER PRADO OLVERA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f8.35
13/01/24 17:51:20

la prece
n, por lo
inal del
/ determ
de sus a

sa med
que la C
a parti
uno de
recepto
conclusión
96 de

u tercer
e el Acu
principio
gítima, p
ales, y
sobre De
s 82, pá
de la Ley
precios a
inados
del merc



Tal concepto de violación es igualmente **infundado.**

¹⁹ 2a./J. 103/2018, de rubro: “**CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU**

principio de si los
vos o ac
entiend
ente cre
esperanz
us accio
de ma
generan
ón, con
ero que
esa exp
obstante,
se en co
o no
ntre los i
ses parti
ficarse a
co.

1

llamado y
de interés
gativa p

²⁰ 2a. XXXVIII/2017, de rubro: “**CONFIANZA LEGÍTIMA. SU APLICACIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO RESPECTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS**”, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, marzo de 2017, tomo II, página 1386.

Como se expuso, se debe partir de la premisa de que constitucional y legalmente no existía impedimento jurídico para que la CRE decidiera establecer precios máximos de gas LP al usuario final en relación con la actividad de distribución no vinculada a ductos. No obstante, se debe valorar si dicha comisión se encontraba frente a una imperante necesidad de interés público.

En primer lugar, conviene hacer hincapié en que el artículo 28 constitucional es claro en señalar que una de las condiciones para el establecimiento de precios máximos consiste en que se trate de productos necesarios para el consumo popular. Asimismo, uno de los objetivos por los cuales se pueden fijar consiste en evitar el alza de precios, lo que puede interpretarse como un principio patente de protección a los consumidores finales de esos productos.

Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/2017 (10a), de rubro: **PRÁCTICAS MONOPÓLICAS. BIENES JURÍDICOS TUTELADOS EN ESTA MATERIA POR EL**

MA. ESTHER PRADO OLVERA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f8.35
13/01/24 17:51:20

Al respecto, conviene reiterar que desde el año de dos mil diecisiete, la CRE presentó ante la COFECE al menos dos denuncias por posibles violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica en el mercado de distribución de gas LP.

En cuanto al consumo de gas LP, de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante INEGI), se estima que el gas LP

MA. ESTHER PRADO OLVERA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.18.3
13/01/24 17:51:20

De igual forma, como se indica en el acuerdo en cuestión, desde la implementación de precios máximos de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo A/024/2021 y su prórroga se obtuvieron resultados que permitieron la contención del aumento de precios que significó un ahorro de \$897.00 (ochocientos noventa y siete, 00/100 moneda nacional) por vivienda al treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Además de que ello significó una reducción de presiones inflacionarias que al final repercutió favorablemente en los consumidores finales de gas LP.

Por otro lado, a partir de la información reportada a través del Sistema de Registro de Transacciones Comerciales de Gas LP, la CRE obtuvo información relativa a que en los años dos mil veinte y dos mil veintiuno, el 82.5% (ochenta y dos punto cinco) del volumen de ventas nacional a usuarios finales (esto es,

²³ Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020 ENIGH (inegi.org.mx)

... que ac...
...rada por...
...5% (die...
...e expend...
...ento) la co...
...sa medic...
...cesidad...
...ría estab...
...eto de ve...
...un proc...
...ido en...
...debe t...
...e los per...
...elevantes...
...umidores...
...destina...
..., el cual...
...porción en...

ello, no
s razona
de qu
gas LP
a que co
rrafo, de
efiere e
os, ello e

determine
a efectiva

MA. ESTHER PRADO OLVERA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f8.35
13/01/24 17:51:20

precios máximos; haciendo especial énfasis en lo siguiente:

e con la
 iones de
 en el Acu
 kimos pa
 numeral
 nente un
 esente r
 e inversi
 sin emb
 s se des
 ue en a
 a determ
 no pued
 e comerc
 n refer
 de la re
 forme a l
 e la res
 dos cons
 rificas máx
 co lógico-

en refier
de la re
forme a l

e la res
dos cons
riferas máx
co lógico-

en, que
para dete
o plantas
o, la u

ACCIÓN

con un alto grado de ineficiencia, cuando el objetivo debe consistir en determinar tarifas máximas en mercados hipotéticamente competitivos y, por consiguiente, en el largo plazo las plantas eficientes deben salir al mercado. Por lo que, las omisiones advertidas conducen a errores en la fórmula contenida en el numeral 3.5.2 para la determinación de precios máximos, dado que no se precisan los elementos que forman parte indispensable de los costos de operación total de ese tipo de instalaciones que deben cubrir para poder operar con el cumplimiento regulatorio y garantizar el abasto a la población, tales como los costos regulatorios que las empresas deben cubrir y los de operación interna de una planta de distribución.

Que incluso, en el Dictamen Preliminar de la COFECE se hace referencia a un “factor K” en la fórmula para el ajuste de las tarifas máximas, como método de control cuando existan choques de oferta que provoquen que la variación del precio máximo exceda a la inflación, por lo que constituye una variable

la inflación, por lo que constituye una variable

MA. ESTHER PRADO OLVERA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.18.35
13/01/24 17:51:20

Independencia
del número
de variaciones
anualizadas

luyen, qu
que esta
nforme a
en en los

e la met
Gas LP
informa
funda
ción es
n las va
que se u

en en se
onómico
el costo
apropiad
; y que,
os precio
a y comp
era nec
el Acuerdo
ector a

ACCIÓN

CRE un amplio margen de discrecionalidad para precios máximos de venta, a la vez que se inactiva la actividad de distribución de gas LP por medio de los sistemas de distribución de gas LP por medio de los ductos, en contravención a lo dispuesto en los artículos 25 y 28 constitucionales.

Tales argumentos son **infundados**.

Lo anterior, porque en el Anexo Único al Acuerdo reclamado se establece la conformación y metodología del cálculo de precios máximos. Cuando se advierte de su contenido, se trata un modelo que

La metodología se basa en una estructura y

La metodología se basa en una estructura y

operativa
n. Sobre
a que lo
lo que d

igual modo, el determinante principal de la elección de cada distribución es el que sirve de medio de

otra p
s bajo a
e gas LP
a fórmula
ye el p
n región.

está da
medio de
costo unit
realización
que constit
del prec

ACCIÓN

MA. ESTHER PRADO OI VERA
706a6623a63fae6d0000000000000000000000000000000001835
13/01/24 17:51:20

Incluso, el hecho de que en el Acuerdo reclamado

Incluso, el hecho de que en el Acuerdo reclamado

Incluso, el hecho de que en el Acuerdo reclamado

...en la re
...eban ser
...principio
...rata de
...var a cab
...so de
...técnica,
...e lo q
...el sector

te las in
ares, est
nalidad
avención
de circun
intrínsec
nales y c

respecto, no
jurispruden

CE NA
OR. AL
GO FIS
ICADOR
DETE
E A LA

De igual modo, debe indicarse que la circunstancia de que las autoridades, como la CRE, cuenten con facultades discrecionales no necesariamente puede entenderse como un ejercicio arbitrario de sus atribuciones²⁵, pues en ese supuesto resulta necesario analizar los actos en los que éstas se concretan, a fin de determinar caso por caso si su ejercicio fue debido o indebido²⁶.

Además, en el caso la facultad de determinar precios máximos de gas LP está precedida de las disposiciones contenidas en el Acuerdo reclamado y su anexo, las cuales, conforme a lo expuesto, constituyen un marco de actuación que define con un suficiente grado de precisión cuál es el alcance y objeto de la

²⁶ P. LXII/98, de rubro: “**FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE LAS CONCEDIDAS A LA AUTORIDAD**”, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, septiembre de 1998, página 56.

para la
etos oblig
cálculo, e

lo anterior
e en cua
timos qu
obtenido
olimiento
cuentran
re jurídica

último, e
considerab
nte, los
terminacio
alguna de
lico, esta
eo²⁷ para
mentos
efectos
s, así co
ista, rela
l acredita
ra en su

En su primer concepto de violación, las quejas exponen que el Acuerdo A/023/2022 reclamado es inconstitucional, puesto que vulnera los derechos fundamentales de seguridad jurídica, legalidad y libre concurrencia y competencia económica, e infringen el principio de división de funciones inmerso en la integración de los órganos constitucionales autónomos y los poderes de la Unión, así como el principio de supremacía constitucional.

Lo anterior, según refieren, porque se pretende fijar un precio máximo de venta al usuario final para las actividades de comercialización, distribución y expendio

MA. ESTHER PRADO OLVERA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.18.35
13/01/24 17:51:20

al confi
a Econó
ación de
cional.

que, pre
a Econ
s bases
n de pre
nte el E
creto le
precios n
de con
e que s
terminar
to, la
a efectiva
ndo suje
en el artí

de Gobierno
a o atribu
carecen
consecu

ACCIÓN

comercialización de Gas LP al usuario final quedaba sujeta a precios máximos, posterior a que la COFECE así lo determinara mediante una declaratoria de ausencia de condiciones de competencia efectiva en dicho mercado relevante. Solo así la CRE estaría facultada y en condiciones de emitir disposiciones generales que materializaran el decreto presidencial relativo, estableciendo una metodología clara y transparente para la fijación de precios máximos.

Que el actuar de la CRE es irregular y contrario al artículo 90 constitucional en relación con los artículos 19 a 21 la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, dado que en ningún momento intervino el Consejo de Coordinación del Sector Energético en el Acuerdo A/023/2022; y que, además, conforme al artículo 82, fracción I, de la Ley de Hidrocarburos, mientras existan condiciones de competencia efectiva, la regulación de contraprestaciones, precios y tarifas, se determinarán por las condiciones del mercado, como en este caso, en

contraprestaciones, precios y tarifas, se determinarían por las condiciones del mercado, como en este caso, en

MA. ESTHER PRADO OLVERA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f8.35
13/01/24 17:51:20

regulación de precios, salvo determinación en contrario de la COFECE.

Es **infundado** el concepto de violación planteado por las quejas.

Para justificar tal aserto, es importante reiterar que, en términos del artículo 81 de la Ley de Hidrocarburos, corresponde a la CRE la regulación y supervisión de diversas actividades en el mercado de hidrocarburos, incluyendo las correspondientes a distribución, comercialización y expendio al público de petrolíferos, entre los cuales se encuentra el gas LP²⁸.

Asimismo, en términos de lo expuesto en este fallo, la CRE sí cuenta con facultades para establecer precios máximos como regulación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos, así como 77 del Reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de dicha ley.

No obstante, dicha atribución no es absoluta, pues como se advierte de dichos preceptos, se encuentra sujeta a excepciones:

28 **Artículo 81.** *Corresponde a la Comisión Reguladora de Energía:*
I. Regular y supervisar las siguientes actividades, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Agencia:
 (...) *c) Distribución de Gas Natural y Petrolíferos;*
 (...) *e) Comercialización y Expendio al Público de Gas Natural y Petrolíferos, y (...)*

82. (...)

La regulación de contraprestaciones, precios y tarifas que establezca la Comisión Reguladora de Energía, con excepción de las actividades de Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, gasolinas y diésel, cuyos precios se determinarán conforme a las condiciones de mercado, se sujetará a lo siguiente:

$$(\dots)$$

Vigésimo Noveno. En relación con el Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, se observará lo siguiente:

 (\dots)

Los precios al público de Gas Licuado de Petróleo se determinarán bajo condiciones de mercado a partir del 1o. de enero de 2017 o antes, en la fecha en que se haya implementado el programa de apoyos focalizados a los consumidores a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, y (...)”

Reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de dicha ley

77. La Comisión expedirá, mediante disposiciones administrativas de carácter general, la regulación de las contraprestaciones, precios o tarifas para las actividades permitidas conforme al presente Reglamento, con excepción de las actividades de comercialización y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, gasolinas y diésel, cuyos precios se determinarán conforme a las condiciones de mercado.

La Distribución no vinculada a Ductos de Gas Licuado de Petróleo y demás Petrolíferos no estará sujeta a la regulación de contraprestaciones, precios o



MA. ESTHER PRADO OLVERA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f8.35
13/01/24 17:51:20

interpretación
e en pri
exceptua
ciones
ción, ex
ductos, t
la última
en que e
Federal

e dicha s
claro qu
principio,
ductos d
No obst
condicion
ductiva,
le precio
o en el
a Econ
s de m
condicio
de poc

Esta interpretación se refuerza por la referencia que hace el precepto en cuestión a los artículos 4º, fracción XI, y 82, segundo párrafo, de la Ley de Hidrocarburos. El primer precepto define la actividad de distribución como la actividad logística relacionada con la repartición, incluyendo el traslado, de un determinado volumen de Gas Natural o Petrolíferos desde una ubicación determinada hacia uno o varios destinos previamente asignados, para su Expendio al Público o consumo final. El segundo precepto, como se indicó, establece que el expendio al público de gas LP estará excepcionado de la regulación de precios que emita la CRE.

29 **Artículo 96.** Cuando las disposiciones legales o reglamentarias prevengan expresamente que deba resolverse u opinar sobre cuestiones de competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otros términos análogos, o cuando así lo determine el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o decretos, la Comisión emitirá de oficio, a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, a solicitud de la dependencia coordinadora del sector correspondiente o a petición de parte afectada la resolución u opinión que corresponda, para lo cual se estará al siguiente procedimiento: (...))

en el se

3

0

interpretar
Sala de
resolver e
catorce
eleció lo s

Así, en p
la Ley d
dad con
n genera
e los te
ujetarse
ontrapre
su part
n que d
aciones, p
las que
al públic
diésel, la
al para
s de con
entonc
s de
taciones
sto es, s
de co
aciones,
e regula
de merc

TRIGÉSIMO OCTAVO. Que, para efectos del presente Acuerdo, los permisionarios sujetos a esta regulación de precios máximos de Gas LP objeto de venta al Usuario Final, son los que realizan **alguna o algunas** de las siguientes actividades: i) comercialización de Gas LP, conforme al artículo 19 del Reglamento; ii) **distribución de Gas LP** por medios distintos a ductos, en sus modalidades: a) distribución mediante planta de distribución; b) distribución por medio de auto-tanque y c) distribución mediante vehículos de reparto, en términos de los artículos 4, fracción XI, de la LH y 35 del Reglamento y al Acuerdo A/056/2018 y iii) **expendio al público de Gas LP** en términos del artículo 4, fracción XIII, 41 y 42 del Reglamento, en sus modalidades, a) bodegas de expendio, b) estaciones de servicio con fin específico y c) estaciones de servicio multimodal, a excepción de la modalidad estación de servicio para autoconsumo.

Esto se replica en el capítulo 1, apartado 1.2 De los sujetos obligados de las disposiciones administrativas contenidas en el Anexo Único del acuerdo en cuestión:

Con el objetivo de proteger los intereses del Usuario Final; los **sujetos obligados** de las presentes Disposiciones Administrativas de Carácter General son

MA. ESTHER PRADO OLVERA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f8.35
13/01/24 17:51:20

- i. Comercialización.*
- ii. Distribución de gas licuado de petróleo por medios distintos a ductos, en sus modalidades de:*
 - a) distribución mediante planta;*
 - b) distribución por medio de autotanque y;*
 - c) distribución mediante vehículos de reparto.*
- iii. Expendio al público de gas licuado de petróleo, en sus modalidades de:*
 - a) bodegas de expendio;*
 - b) estaciones de servicio con fin específico y;*
 - c) estaciones de servicio multimodal, a excepción de la modalidad de estación de servicio para autoconsumo.*

MA. ESTHER PRADO OLVERA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.18.3
13/01/24 17:51:20

En ese sentido, se advierte que en el caso a estudio, el uno de diciembre de dos mil veintiuno la COFECE publicó en el Diario Oficial de la Federación un extracto del dictamen preliminar del expediente *****

Asimismo, estableció el mercado relevante por referencia a la actividad de distribución de gas LP a los usuarios finales mediante i) plantas de distribución y ii) autotanques.

Concluyó que si bien se identificaron 220 (doscientos veinte) mercados relevantes correspondientes a dicha actividad, en 213 (doscientos trece) de ellos **no existen condiciones de competencia efectiva:**

Finalmente, en la sección 7 del DICTAMEN PRELIMINAR, por lo anteriormente expuesto y señalado, la AUTORIDAD INVESTIGADORA concluye y determina lo siguiente:

SEGUNDO. Notifíquese mediante oficio a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Economía el presente DICTAMEN PRELIMINAR que establece preliminarmente que hay elementos para concluir que no existen condiciones de competencia efectiva en los MERCADOS RELEVANTES señalados en el resolutive PRIMERO del presente DICTAMEN.

MA. ESTHER PRADO OLVERA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f8.35
13/01/24 17:51:20

de las DI

COFEC
e de mer
de gas

ismo, co
está faci

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5636961&fecha=01/12/2021#gsc.tab=0

De igual modo, debe hacerse énfasis en que si bien el extracto publicado por la COFECE claramente señala que se trata de un dictamen preliminar, ello no le quita el carácter de una determinación, que es lo que exigen, en su literalidad, la Ley de Hidrocarburos (artículo 82, último párrafo) y el Reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de dicha ley; en cualquier caso, tal determinación fue confirmada al emitir la COFECE su resolución en el expediente ***
***** , con fecha veintidós de septiembre de dos mil veintidós, reiterando la ausencia de condiciones de competencia efectiva en 213 (doscientos trece) mercados relevantes, consistentes en la distribución de GLP a usuarios finales mediante plantas de distribución y autotanque con una dimensión geográfica regional³¹.

Por lo que, contrario a lo argüido por la parte quejosa, la CRE estaba facultada para sujetar la actividad de ese sector (por cuanto hace a la **distribución de gas LP** no vinculada a ductos) a la regulación de contraprestaciones y precios, al haberse determinado previamente por la COFECE que no existen condiciones de competencia efectiva; lo anterior, conforme al supuesto ordinario que deriva de la observancia del marco legal aplicable.

³¹ <https://www.cofece.mx/CFCResoluciones/docs/Declaratorias/V143/0/5826385.pdf>



MA. ESTHER PRADO OLVERA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f8.35
13/01/24 17:51:20

No obstante lo anterior, por cuanto hace a *****

*** *** **** *** **** **** **** **

***** ** ***** ** ***** ** *** ***** **

, del que es

³²https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/843696/Expendio_al_P_blico_de_Gas_Licuada_de_Petr_oleo_mediante_Estaci_n_de_Servicio_con_fin_Espec_fico.pdf

MA. ESTHER PRADO OLVERA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f8.35
13/01/24 17:51:20

se deter
, esto es
y de la
ternacion

ello, lo dis
ulta aplic
e preven
as activid
que a
de con
os preci
n por con

a, en lo
quinto, vig
quinto d
o siguiente

SIMO C
ce que l
n gener
en el án
de los
n conform
e a juic
de comp
con la
prelimin

³³ [Prospectiva de Gas LP 2017.pdf \(www.gob.mx\)](#)

VIGÉSIMO QUINTO. Que, el artículo 77 del Reglamento, establece que la Comisión expedirá las disposiciones administrativas de carácter general, **la regulación de los precios para las actividades permitidas**, la cual tomará en cuenta los principios que permitan el desarrollo eficiente de la economía y de los mercados competitivos, que reflejen las mejores prácticas en las decisiones de inversión y producción, y que protejan los intereses del Usuario Final. La Comisión no reconocerá los precios que se aparten de los principios y, además los precios que autorice la Comisión a constituir mecanismos que promuevan una oferta y uso racional de bienes y servicios.

(...)

VIGÉSIMO OCTAVO. Que, derivado de las conclusiones que ha realizado la COFECE en su *Dictamen Preliminar* referido en el Considerando Vigésimo Segundo y que por las características del mercado de gas LP, la concentración de éste difícilmente presentarán modificaciones sustanciales en el corto plazo, además del monitoreo del mercado de Gas LP que realiza la Comisión **se observa que hay elementos para determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en las actividades de comercialización, distribución y expendio al público de Gas LP y, por lo tanto, no existe un mercado competitivo en México.** Cabe señalar que, bajo la estructura de mercado como la que posee México, en la que, los agentes económicos establecen precios con altos márgenes de ganancia que deriva en afectaciones al Usuario Final y restringe el pleno desarrollo del sector energético, en ejercicio de las atribuciones con las que cuenta la Comisión y en

MA. ESTHER PRADO OLVERA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f8.35
13/01/24 17:51:20

VIGÉSIMO NOVENO. Que, la Comisión derivado del análisis de mercado que ha realizado previo a la publicación del Acuerdo A/024/2021 y su prórroga contenida en el Acuerdo A/001/2022, conforme a los resultados arrojados en el Dictamen Preliminar de COFECE referido en el Considerando Vigésimo Segundo y, de conformidad con lo previsto en los artículos 82 de la LH y 77 del Reglamento, se encuentra facultada para emitir la presente regulación de precios máximos de Gas LP, toda vez que no existen condiciones de competencia en la venta de Gas LP al Usuario Final, por lo tanto, la Comisión llevará a cabo una regulación de precios máximos de Gas LP, en tanto no existan condiciones de competencia que permitan la libre determinación de precios bajo condiciones de mercado.

TRIGÉSIMO QUINTO. Que, como se expuso en el Considerando **VIGÉSIMO SEGUNDO**, acorde al contenido del **EXTRACTO** del dictamen preliminar del expediente DC-001-2021, emitido el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, la COFECE concluyó que existen elementos para determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en 213 (doscientos trece) de 220 (doscientos veinte) mercados relevantes en la Distribución de Gas LP no vinculada a ductos. Sobre este punto, se señala que en el presente instrumento, se abarcarán los 220 (doscientos veinte) mercados relevantes, con la finalidad de evitar distorsiones en el margen de los precios a nivel nacional y proteger las condiciones de acceso al combustible, asegurando el control en los precios de

ACCIÓN

dictamen preliminar mencionado para concluir que no existen condiciones de competencia efectiva en las actividades de comercialización, distribución y expendio al público de Gas LP y, por lo tanto, no existe un mercado competitivo en México.

Sin embargo, dicho dictamen únicamente se refiere a los mercados relevantes que ahí se establecieron los cuales **solo abarcan la actividad de distribución de gas LP a usuarios finales mediante plumbos, distribución y autotanque**, no así las actividades de **comercialización y expendio** al público petrolífero. La razón de esto obedeció a que la CFE consideró que estas actividades no son susceptibles de la actividad de distribución por medio de los ductos vinculados a ductos para que los usuarios

un monitoreo, así como un análisis de mercado, tampoco tomó en consideración las excepciones que la

El ECE hay
condiciones d

lo ante
asiste raz
** *****

s efectivamente
para su
de comer
por ubicar
ra aplica
reviamente
ad distin
ductos de

asa inad
buros es
la de r
comercia
sin em
e de mar
n el artí
se indi
pendio a

ACCIÓN

MA. ESTHER PRADO OLIVERA
70.666.20.63.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.18.35
13.01.24.17.51.20

Artículo 82. La Comisión Reguladora de E expedirá disposiciones de aplicación general p regulación de las actividades a que se refiere es en el ámbito de su competencia, incluyendo los té y condiciones a los que deberán sujetarse la pre de los servicios; al igual que la determinación contraprestaciones, precios y tarifas aplicables otros.

otros.

siguiente:

ada activ
cio de la
, existir

correspondientes se determinarán por las condiciones de mercado; (...).

A consideración de la CRE, de dicha fracción se desprende que si bien los precios de gas LP se determinarán conforme a las condiciones de mercado, refiere como excepción el que a juicio de la Comisión Federal de Competencia Económica, no existan condiciones de competencia efectiva en dicha actividad.

No obstante, pasa por alto que cuando esa fracción alude a la regulación para cada actividad, no es posible incluir el expendio al público y la comercialización de gas LP, pues la ley y el reglamento las excluyen de ello al señalar que los precios en esas actividades se determinarán conforme a las condiciones del mercado (artículo 82, párrafo segundo).

Incluso, aun si se considerara que es aplicable a todas las actividades en las que la CRE tiene atribuciones de regulación, sujeta la aplicación, en primer lugar, al juicio de la COFECE y, en segundo lugar, lo circunscribe a la actividad en la que este órgano se pronuncie. Y en el caso, el dictamen preliminar del procedimiento ***** que sirvió de sustento a la CRE únicamente implicó un pronunciamiento y determinación en los mercados relevantes de la actividad de distribución de gas LP no vinculada a

Por ende, no existía sustento normativo para que la autoridad responsable incluyera también como sujetos obligados por el acto reclamado a los permisionarios que cuentan con un permiso para llevar a cabo las actividades de comercialización y **expedio** al público de gas LP. De ahí lo **fundado** del planteamiento bajo análisis respecto de ***** ** ***** ** *****

Ante lo fundado de tal concepto de violación, lo procedente es **conceder** el amparo y protección de la

justicia federal solicitados, únicamente por cuanto hace
a la quejosa ***** **

***** ** *****

SÉPTIMO. Efectos. De conformidad con el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, la sentencia debe contener los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo.

El artículo 77, fracción I, se prevé que tratándose de actos positivos, el efecto del amparo será restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

Por su parte, en términos del artículo 78 de la ley de la materia, cuando el acto reclamado sea una norma general, la sentencia deberá determinar si es constitucional, o si debe considerarse inconstitucional, en este último supuesto, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada, lo que se traduce en la inaplicación únicamente respecto del quejoso o quejosos.

En el caso, la protección constitucional que se concede es para el **efecto** de que **no se aplique** el acuerdo **A/023/2022** por el que la CRE emite las

generaría una asimetría en el mercado de hidrocarburos, pues habría permisionarios sujetos a precios máximos por las actividades de comercialización y expendio al público de gas LP y otros que estarían en posibilidad de fijar los precios por el mismo producto de conformidad con las condiciones de mercado, tal como lo establece el artículo 82, párrafo segundo de la Ley de Hidrocarburos, así como el artículo 77 del Reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de esa ley, lo cual sería contrario a lo dispuesto en el artículo 28 constitucional, específicamente en relación con los principios de libre competencia y concurrencia.

94



MA. ESTHER PRADO OLVERA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f8.35
13/01/24 17:51:20

Cabe señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión *********, en sesión de catorce de junio de este año, determinó que lo anterior es adecuado cuando lo que se busca es evitar una asimetría en un mercado de determinado, como ocurre en el presente caso.

RESOLVE:

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *** ***** *** ** *****
***** ***** ** ***** ***** ,
contra las autoridades y por los actos que han quedado
relacionados en el resultando primero, atento a los

3 307772 150160



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ante Ma. Esther Prado Olvera, secretaria con quien actúa y certifica que la presente **sentencia** así como las constancias que la originaron, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico y que por economía de recursos no se agregan al expediente físico las firmas electrónicas respectivas

JUEZA

SECRETARIA

Se hace constar que se giraron los números de oficios 9521 y 9522. Conste.

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas del _____, el actuario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, publicó en la lista de acuerdos de este órgano jurisdiccional, la determinación que antecede, con la cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, con excepción de las que deban notificarse personalmente, electrónicamente o por oficio; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

MA. ESTHER PRADO OLVERA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f8.35
13/01/24 17:51:20

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
63687193_4138000030777215016.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

FIRMANTE					
Nombre:	MA. ESTHER PRADO OLVERA		Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA					
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f8.35		Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	29/09/23 19:57:41 - 29/09/23 13:57:41		Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256				
Cadena de firma:	4c 04 9d 4c 8c 1f a9 50 dd 15 ea 42 f4 ce 21 4e 65 be 93 15 68 dc 2e 92 df a0 10 4a 87 05 9c 76 33 49 55 b2 ac 24 dc 09 6e d5 97 4a 88 be 58 d2 8c bd d9 2a 50 8f 3a 82 21 d9 9d 39 70 cf ee 44 36 f5 e2 74 d6 07 a9 b8 20 e1 cf 4a 18 28 de 72 16 eb f5 9e 5f 34 ee f5 73 84 f2 d7 06 0c f0 64 4f c3 e3 45 09 8f 1a a6 41 83 ea 1d 46 88 a0 87 56 8c e3 8d 37 8d 5a a4 ca c2 50 27 75 64 aa c7 d0 df b8 28 1f 91 18 e5 c7 be 21 36 8b d1 d3 e9 40 fc ba 7d 6a 6a 42 ca 2e 34 32 08 a0 13 15 7b fe f2 b0 93 fb 12 d7 db f9 d1 84 f1 d5 93 52 7a 9f 6e 79 ef 06 5c 60 b4 10 f6 04 59 3a b5 48 4e 12 61 0f 52 71 28 47 54 9b f9 fa 9b 74 a8 34 75 72 1f bc 7d 72 cc 20 c9 6a 02 a7 20 9a f8 c8 57 6a 29 b2 3a 06 b7 ee 44 6a f2 e4 33 9c c1 fd d9 5a b9 90 22 7b 8b 87 e0 0f 20 f8 47 b2 65 86 12				
OCSP					
Fecha: (UTC / CDMX)	29/09/23 19:57:41 - 29/09/23 13:57:41				
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03				
TSP					
Fecha : (UTC / CDMX)	29/09/23 19:57:41 - 29/09/23 13:57:41				
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Identificador de la respuesta TSP:	48361315				
Datos estampillados:	1UXP8tiRC/g5Uls3F0IF6Be8dgs=				



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	LAURA GUTIERREZ DE VELASCO ROMO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.01.52.37	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	29/09/23 20:23:52 - 29/09/23 14:23:52	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	81 b3 14 3a 00 2c 20 61 03 92 5d dd b1 b3 b2 94 aa 86 f2 b3 ec 82 ee 20 03 76 59 ad f1 e5 3a 83 59 24 e5 0b 5c bd 9b 16 55 1b 74 26 52 14 3b 1b 52 24 a1 94 0d 75 d6 53 19 18 7d f3 2c 3d da 6e 7b 73 d1 0b 7c ae b5 15 85 62 86 a5 0a 4a 1f cf 01 6a 94 57 6e 13 a7 01 01 6b 49 c5 0e 42 30 11 1f 7b 30 e9 59 72 0f ee 8e 93 4b 3d 20 68 6d bd db a5 95 cd 87 d2 9a 80 39 83 6f ec 7d 60 d5 45 01 8b f5 d3 9f d6 76 6f 55 b9 37 63 fe 7c b1 3e a9 f9 30 4a 72 b9 8d 73 c1 c6 05 a1 05 c5 b8 28 13 d7 95 f1 e6 3f 67 b6 14 64 cd 05 72 8b 51 61 dc 99 60 c0 1f c5 82 b1 1f 5f b9 31 75 99 0e d8 3f c2 c9 45 50 e7 b0 ee c3 44 62 e0 c1 5f 0d 03 7e fc e9 88 ea 58 8c b5 a0 98 12 c3 32 52 9c 6c 48 d4 e2 8a 01 ef 13 ad df 3d 29 86 7f b8 13 0b 24 b6 5c 58 fa ad c4 37 4b cb d3 4e 42 69 25 ac			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	29/09/23 20:23:52 - 29/09/23 14:23:52			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	29/09/23 20:23:52 - 29/09/23 14:23:52			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	48389733			
Datos estampillados:	Is+gTlrweXG3eoqwggh4MJ1W/06c=			

El licenciado(a) Ma Esther Prado Olvera, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.